

## SOCIEDAD SALINAS MARÍTIMAS DE MANAURE LIMITADA -SAMA LTDA-,

La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presenta algunas proposiciones respecto del panorama jurídico de la SOCIEDAD SALINAS MARÍTIMAS DE MANAURE LIMITADA -SAMA LTDA-, previos hechos y consideraciones que también se reseñan más adelante:

### Antecedentes

- 1.- El 27 de junio de 1991, el Gobierno Nacional, por conducto del Instituto de Fomento Industrial -IFI- Concesión de Salinas firmó un acuerdo con la comunidad Wayuu de Manaure, en el cual se acordó que se crearía una sociedad de economía mixta sobre la que el Estado colombiano tendría una participación no inferior al cincuenta y uno por ciento (51%) y la comunidad Wayuu una mínima del veinticinco por ciento (25%), para la explotación de las salinas de Manaure. Las utilidades de esa sociedad se destinarían a satisfacer las necesidades fundamentales de la comunidad Wayuu de Manaure.
- 2.- Por diferentes circunstancias, la sociedad no se constituyó dentro del plazo acordado, lo cual llevó a que con sentencia T-0072 de 1995, la Corte Constitucional decidiera una acción de tutela que amparó los derechos fundamentales de la comunidad Wayuu de Manaure y ordenó que se cumpliera el acuerdo de 1991 tal como había sido firmado o que se adoptaran medidas alternativas que produjeran los mismos efectos sobre la comunidad Wayuu, en el sentido de permitirles gozar de un especial nivel de vida en el medio en el cual habitan.
- 3.- Por inconvenientes de diversa índole y discusiones jurídicas, después de la sentencia de tutela, la sociedad no se constituyó y hubo de promoverse una ley que autorizara al gobierno nacional a crearla. Esta ley, cuyo proyecto fue presentado por el Gobierno Nacional fue la 773 de 2002, en la cual efectivamente, en su artículo 1, se le autorizó para crear una sociedad de economía mixta, en calidad de concesionaria, vinculada al Ministerio de Desarrollo -actual Ministerio de Comercio Industria y Turismo- cuyo objeto principal sería la administración, fabricación, explotación, transformación y comercialización de sales que se producían en las salinas marítimas de Manaure, Guajira, actividades que desarrollaba el Instituto de Fomento Industrial -IFI-, con motivo de un contrato de administración delegada celebrado con la Nación el primero (1) de abril de 1970, por el que se creó el ente IFI Concesión de Salinas.
- 4.- En el artículo 2 de la ley se dispuso que en los tres (3) meses siguientes a su entrada en vigencia, el IFI, a nombre de la Nación entregaría, en calidad de capital inicial de la nueva sociedad, la totalidad de los activos vinculados al contrato de administración



delegada, en lo relativo a las salinas marítimas de Manaure, Guajira, a la asociación de autoridades tradicionales indígenas Wayuu del área de influencia de las Salinas de Manaure, "Sumain Ichi", en un 25%, al Ministerio de Desarrollo Económico como representante de la Nación en la nueva sociedad el 51%, y el 24% restante al municipio de Manaure, Guajira. Estas transferencias accionarias se harían a las partes referidas como socias de la nueva empresa sin que implicara para ellas costo alguno.

5.- Y agregaba:

"Al momento de constituirse la sociedad de economía mixta, que se autoriza en el artículo 10. de la presente ley, la participación de la asociación "Sumain Ichi", no podrá ser inferior al 25% del capital suscrito y pagado. Una vez constituido este porcentaje podrá variar al igual que el de los otros accionistas de la sociedad. Las utilidades que obtenga el Municipio de Manaure, Guajira, como consecuencia de la participación en esta sociedad serán destinadas a atender los costos que implican el suministro de agua en su territorio a través del sistema no convencional de los molinos de viento."

6.- El artículo 3 dispuso:

"Entrega de los activos involucrados en la prestación de los servicios públicos. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley y con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos de educación, salud, suministro de agua y saneamiento básico de la Media y Alta Guajira, el Instituto de Fomento Industrial -IFI- a nombre de la Nación entregará los activos involucrados en la prestación de dichos servicios públicos a las administraciones municipales responsables de su prestación y en cuyo territorio se encuentran ubicados dichos activos, de acuerdo a las definiciones y procedimientos legales vigentes.

El Gobierno Nacional entregará los activos involucrados a la prestación de los servicios públicos de provisión de agua en óptimas condiciones de funcionamiento.

PARÁGRAFO. La totalidad de los activos vinculados al contrato de administración delegada, suscrito entre la Nación y el Instituto de Fomento Industrial, IFI, al que se refiere el artículo 10. de la presente ley, que no estén vinculados a la prestación de servicios públicos o a la explotación de las salinas nacionales de Manaure, Guajira, serán igualmente transferidos a nombre de la Nación, por parte del Instituto de Fomento Industrial, IFI, a las administraciones municipales donde se encuentren ubicados."

7.- Esta ley fue objeto de dos (2) demandas de inconstitucionalidad, una en la parte de su artículo 1 que decía "en calidad de concesionaria" y otra por vicio de trámite. De la sentencia C -620 de 2.003, que resolvió sobre estas demandas, debe destacarse: La ley otorgó una autorización para la creación de la sociedad, no impuso una



obligación, con lo cual se dejó claro que para su constitución se requeriría la voluntad de las comunidades indígenas -uno de los argumentos de la demanda era que se violaba el derecho de la comunidad Wayuu a acceder a la salina por los mecanismos del Código de Minas-, de manera que si éstas no accedían a la creación de la sociedad podían acudir a los mecanismos del Código de Minas -que concede prelación a las comunidades indígenas- para hacerse a la explotación de la mina cumpliendo los trámites y exigencias normales de dicho código.

De hecho, el Ministerio de Minas, por medio de la Resolución No. 181087 de 21 de octubre de 2002, había declarado y delimitado la Zona Indígena de Manaure, a favor de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu del Área de Influencia de las Salinas de Manaure -SUMAIN ICHI- y estas habían radicado una propuesta de contrato de concesión minera en INGEOMINAS. El trámite del referido estatuto hubiera implicado someterse a un proceso licitatorio y el cumplimiento de requisitos e inversiones que no se requería cumplir por la sociedad que se crearía con base en la Ley 773 de 2002.

La Corte destacó que sin el mecanismo de la sociedad la comunidad Wayuu tendría serias dificultades para acceder a la explotación de las minas.

Resaltó que, si bien la sociedad sería concesionaria de las salinas, su explotación se haría dentro del marco de un contrato de concesión minera que celebraría el Ministerio de Minas con dicha sociedad.

También llamó la atención en el sentido de que las utilidades de la sociedad no serían de libre disposición por los socios, sino que deberían ser invertidas en las necesidades de la comunidad, no solo de las que firmaran el contrato social, sino de todas las comunidades del área de influencia de las salinas. Bajo este entendimiento se declaró que la ley era constitucional.

- 8.- Avalada la Ley por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional decidió que para lograr que la explotación de las salinas beneficiara no solo a la asociación que firmara el contrato de sociedad, que sería en principio SUMAIN ICHI, sino también a las otras comunidades del área de las salinas, una vez creada la sociedad, la Nación cedería sus aportes, en una proporción tal que en la sociedad quedaran representadas no solo la comunidad SUMAIN ICHI, sino también la Asociación de Cosechadores de las Charcas Shorshimana y Manaure -WAYA WAYUU- y la Asociación de Charqueros Paralelos de Manaure -ASOCHARMA.

Esta decisión generó la duda jurídica de si el Estado podía ceder sus bienes a las asociaciones indígenas Waya Wayuu y Asocharma, que son de derecho privado, dado que el artículo 355 de la Constitución Política prohíbe a las ramas u órganos del poder



público decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

El Consejo de Estado, en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 3 de junio de 2004, conceptuó que en este caso sí era posible porque se haría en cumplimiento de un deber constitucional de proteger la diversidad étnica y cultural de los Wayuu.

9.- El 21 de diciembre de 2.004, con Escritura Pública 135 de la Notaría Única de Uribia se formalizaron varios actos jurídicos, así:

- a) Un contrato de sociedad, por el cual se crea Salinas Marítimas de Manaure Ltda – SAMA Ltda-, que consta del artículo primero, al artículo trigésimo de la Escritura 135, el cual fue acordado, según consta en el artículo primero de la Escritura, por el Ministro de Comercio Industria y Turismo en nombre de la Nación, por el alcalde del Municipio de Manaure, y por el representante legal de la asociación SUMAIN ICHI.

El capital social quedó constituido por los activos vinculados al contrato de administración delegada desarrollado por el IFI Concesión de Salinas, a los cuales se les asignó un valor de sesenta mil millones setecientos veinte millones de pesos (\$60.720.000.000<sup>oo</sup>) y se declaró pagado en su integridad, distribuido así entre los socios iniciales: (i) La Nación 51%; (ii) Sumain Ichi 25% y (iii) el Municipio de Manaure 24%.

Después de la cesión de derechos de la Nación, lo cual se hizo en la misma Escritura: (i) Sumain Ichi 36%; (ii) municipio de Manaure 24%; (iii) Waya wayuu 30% y (iv) Asocharma 10%. En el contrato de concesión minera, se condicionó la entrega material de estos bienes a la sociedad creada a que se contratara un operador privado.

Se dispuso que la naturaleza de la sociedad es la de economía mixta, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico -hoy Ministerio de Comercio Industria y Turismo-, bajo la forma de una sociedad de responsabilidad limitada, regida para el ejercicio de su objeto social y actos conexos por el derecho privado, pero sujeta, en cuanto a su régimen de contratación, a la Ley 80 de 1993 -artículo primero de la Escritura 135-.

Su objeto social principal es la administración, fabricación, explotación, transformación y comercialización de las sales que se producen en las salinas marítimas de Manaure departamento de la Guajira, mediante el sistema de concesión y en la calidad de concesionaria que le confiere el Artículo 1 de la Ley 773 de 2.002. Se expresa en el artículo sobre el objeto social, que para las labores de explotación



de las salinas se contratará, por licitación pública, un operador privado con capacidad técnica y económica para dichas labores.

Se crearon los órganos sociales usuales de las sociedades de responsabilidad limitada y se acordó que, además del control administrativo que por ley corresponde al Gobierno por tratarse de una sociedad de economía mixta, control al que se hizo referencia expresa en el Artículo vigésimo de la Escritura 1353, se creó un Comité Transitorio Institucional de Vigilancia (artículo décimo quinto de la Escritura 135) por diez (10) años, con funciones de asesoría y seguimiento, para lograr los propósitos perseguidos con la constitución de la sociedad, según el acuerdo del 91 y la Ley 773 de 2002 y con funciones específicas de: (i) aprobar la designación del gerente; (ii) emitir concepto previo favorable para la designación del operador privado; (iii) emitir concepto sobre la planta de personal que estructure la junta general de socios; (iv) asesorar a la junta en el señalamiento de las prioridades de inversión de la sociedad y de las utilidades de los socios; (v) asesorar al Gobierno Nacional en el diseño de los planes y programas de administración y capacitación intercultural que implante para la comunidad Wayuu acceda paulatinamente a la gestión técnica y administrativa de la sociedad, así como en la adopción por el gobierno de las medidas conducentes a su mejoramiento; (vi) asesorar a la junta de socios en la adopción de las recomendaciones de la banca de inversión y en la integración de las charcas familiares a la comercialización de sal de la sociedad; (vii) asesorar en las decisiones relativas a la cesión de cuotas e inclusión de nuevos socios; (viii) recomendar al Gobierno la aplicación de la cláusula resolutoria de las cesión de aportes de la Nación a las comunidades indígenas; (ix) aprobar políticas de inversión de excedentes de tesorería; y (x) las demás que la junta de socios le solicite.<sup>1</sup>

Este comité está conformado por: -dos representantes de la sociedad; -un representante del Ministerio de Minas y Energía; -un representante del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y -el representante legal del IFI Concesión de Salinas, el cual, una vez se termine la liquidación de este organismo, será reemplazado por otro representante del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

En los artículos vigésimo primero a vigésimo quinto de la Escritura (perteneciente al contrato de sociedad) se acordó que la sociedad contrataría un operador privado, con capacidad técnica y financiera para ejecutar la concesión minera, mejorar la infraestructura y aumentar el potencial productivo del centro salinero. El operador

---

<sup>1</sup> Por virtud de este control administrativo se pactó, en el Artículo vigésimo, que el Gobierno se aseguraría que las actividades y funciones de la sociedad se cumplan de acuerdo con el acuerdo del 91 y la ley 773 de 2002, en armonía con las políticas gubernamentales y de conformidad con los planes y programas adoptados con tal objeto, para lo cual la sociedad celebrará con el citado ministerio convenios, planes o programas de desempeño, en los cuales se determinen los compromisos y obligaciones de las partes, los plazos, deberes de información e instrumentos de control para garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión.



sería seleccionado por el procedimiento de licitación pública, por un comité conformado por representantes de la sociedad, previo concepto favorable del Comité Interinstitucional de Vigilancia. Los requisitos mínimos que se exigirían al operador privado serían definidos por la junta general de socios, con base en un estudio de banca de inversión que el IFI Concesión de Salinas contrataría para el efecto.

Como obligaciones mínimas que se exigirían al operador privado, se mencionaron las siguientes (Artículo vigésimo segundo): -contratar 75% de mano de obra de la región; -desarrollar un plan de inversiones aprobado por la autoridad minera, de acuerdo con el Código de Minas; administrar las cosechas indígenas asegurando su financiación; y dirigir y administrar el proceso de integración de las charcas familiares a la comercialización de sal de la sociedad.

- b) Una cesión de derechos sociales de la Nación, representada por el Ministro de Comercio Industria y Turismo, a las asociaciones Sumain Ichi, Waya wayuu y Asocharma, quienes manifestaron su aceptación a dicha cesión, todo lo cual consta en el artículo sexto de la Escritura 135.

i. Esta cesión quedó sometida a condición resolutoria por cualquiera de los siguientes hechos.

1. Que los cesionarios voten favorablemente cualquier decisión, o autoricen cualquier acción o permitan cualquier omisión que contradiga la destinación general de los bienes, recursos o utilidades de la sociedad.
2. Que los cesionarios voten favorablemente cualquier decisión, o autoricen cualquier acción o permitan cualquier omisión que contradiga el destino específico de los bienes o recursos de la sociedad.
3. Que los cesionarios voten favorablemente cualquier decisión, o autoricen cualquier acción o permitan cualquier omisión que modifique lo dispuesto en los estatutos de la sociedad sobre la contratación de un operador.
4. Que los cesionarios voten favorablemente cualquier decisión, o autoricen cualquier acción o permitan cualquier omisión que contradiga los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales a los cuales están sujetos los bienes de la sociedad.
5. Que los cesionarios voten favorablemente cualquier decisión, o autoricen cualquier acción o permitan cualquier omisión que contradiga el destino



específico de las utilidades de la sociedad, según lo previsto en el acuerdo del 91 y en la Ley 773 de 2002

6. Que los cesionarios voten favorablemente una reforma de los estatutos sociales que implique el desconocimiento, recorte, o disminución de los derechos de la Nación se reserva en la administración de SAMA como parte del Comité Interinstitucional Transitorio de Vigilancia, durante diez (10) años.
- c) Un contrato de concesión minera, celebrado entre SAMA Ltda y la Nación, representada por el Ministerio de Minas y Energía, contrato que consta en los artículos trigésimo primero a quincuagésimo séptimo de la Escritura 135. Este contrato se remite, en lo no regulado por él expresamente, al Código de Minas y, por otra parte, contiene las cláusulas propias de los contratos de concesión, incluyendo la posibilidad de la imposición de multas por la concedente y una cláusula de caducidad de acuerdo con el Código de Minas. No se dispone nada en relación con la forma de dirimir diferencias entre las partes, por lo cual este aspecto se entiende regulado por el Artículo 293 del Código de Minas, Ley 685 de 2.001, el cual atribuye la competencia sobre estos contratos, en primera instancia, a los tribunales administrativos del lugar de su celebración.

En el contrato de concesión minera, en el artículo quincuagésimo quinto de la Escritura 135, se pactó -entre SAMA Ltda y la Nación – Ministerio de Minas y Energía que SAMA Ltda debería contratar un operador privado de las salinas, antes del 1 de julio de 2006 y que mientras no lo hiciera no se le haría entrega material de los activos de las salinas y que su condición de concesionaria de las salinas quedaba sujeta a condición suspensiva. Mientras tanto, el IFI Concesión de Salinas continuaría a cargo de las salinas, pero entregaría a SAMA Ltda cincuenta millones de pesos (\$50.000.000<sup>oo</sup>) y pagaría un aporte mensual del tres por ciento (3%) de las ventas brutas de las salinas de Manaure, con el cual se pagaría en seis (6) meses el referido monto. SAMA Ltda asumió la obligación de adelantar las acciones necesarias para conseguir la licencia ambiental, la concesión portuaria, el análisis del estudio de la banca de inversión y las actividades propias para contratar, por licitación pública, el operador privado.

Por varias razones, como fueron las dificultades jurídicas para definir quién debía pagar un impuesto de timbre, tropiezos en los trámites ante las oficinas estatales para lograr las licencias requeridas y el registro minero, lo cual se requería para contratar el operador privado por licitación pública, llevaron a que en varias oportunidades se prorrogara el plazo pactado en el contrato de concesión minera para la contratación del operador privado, el último de los cuales se venció el 30 de junio de 2007.





- 10.- El 11 de octubre de 2007, el Ministro de Comercio Industria y Turismo acudió a la Notaría 70 del Círculo Notarial de Bogotá y elevó a Escritura Pública identificada como la N° 1592, una declaración en la que manifestó:
- a) El artículo quincuagésimo quinto de la Escritura 135 -que pertenece al contrato de concesión minera- suspende los derechos de SAMA Ltda. como concesionaria de las salinas mientras no contrate un operador privado;
  - b) Que SAMA Ltda ha incumplido reiteradamente esa obligación;
  - c) Que el incumplimiento de SAMA Ltda de esa obligación es una condición resolutoria para disolver la sociedad;
  - d) Que los cesionarios de los derechos sociales de la Nación en la sociedad SAMA Ltda, contrajeron la obligación de contratar un operador privado, cuyo incumplimiento acarrearía la resolución de pleno derecho de dicha cesión.
  - e) Que ni las comunidades cesionarias de los derechos sociales cedidos, ni la sociedad, han cumplido las obligaciones propias de la contratación, por licitación pública, del operador privado.
  - f) Que operó de pleno derecho la condición resolutoria de la cesión de derechos de la Nación a las comunidades indígenas.
  - g) Que como consecuencia de haber operado la condición resolutoria y de la declaratoria que de ello se hace, el Ministerio adquiere nuevamente su calidad de socio mayoritario de SAMA Ltda., con una participación del 51%
  - h) Que la nueva composición del capital de SAMA Ltda., es: Ministerio de Comercio Industria y Turismo 51%; Asociación SUMAI ICHI 25%; y Municipio de Manaure, Guajira, 24%.
- 11.- En pronunciamiento de Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá del ocho (8) de septiembre de 2009, se estableció: (i) la declaración del Ministerio de Comercio Industria y Turismo es un acto absolutamente nulo por objeto ilícito, dado que viola normas de orden y derecho público. Porque la ocurrencia de una condición resolutoria pactada como de "pleno derecho" no permite a las partes de un contrato hacerse justicia por propia mano; (ii) teniendo en cuenta los antecedentes de la Escritura 135, en especial el acuerdo del 91 y la Ley 773 de 2.002, no se encuentra que la contratación de un operador privado a que se hace referencia en el contrato de sociedad atente contra norma alguna, sino que, por el contrario, parece una fórmula razonable para la explotación de unas salinas que requieren de





importantes inversiones para las cuales los socios no tienen recursos; (iii) SAMA no habría podido cumplir con la obligación de contratar al operador privado por hechos ajenos a su voluntad, como la imposibilidad de pagar el impuesto de timbre sobre el contrato de concesión y los problemas jurídicos que se suscitaron ante distintas dependencias para los trámites asumidos por SAMA. (iv) como no se declara la nulidad de las cláusulas que se refieren al operador privado, y no se ha cumplido con la condición de contratarlo, no se accede a ninguna de las pretensiones de condena, todas las cuales dependen de esa declaratoria de nulidad y del incumplimiento de la Nación de hacer la entrega material de los bienes vinculados a la actividad de las salinas. (v) tampoco se condena a SAMA por el supuesto incumplimiento de su obligación de contratar el operador privado, primero, porque no resulta competencia del Tribunal, por ser ésta una obligación del contrato de concesión.

- 12.- Mediante escritura pública No. 249 del doce (12) de diciembre de 2011 se reformaron los estatutos de la sociedad. Se advierte que el Gobierno Nacional y el IFI Concesión de Salinas habrían hecho caso omiso de las obligaciones adquirido en la No. 135 de 2004, refiere que estos ya no tendrían el control administrativo sobre aquella y establece nuevas funciones al Gerente.

Este documento fue suscrito exclusivamente por el representante legal de la sociedad y establece que su objeto deberá ser reformado para la expedita contratación del operador privado, eliminar condiciones suspensivas y resolutorias establecidas en favor del Gobierno Nacional y adecuarse a la naturaleza de aquella, que sería eminentemente privada.

- 13.- Por consulta formulada por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Consejo de Estado mediante concepto del veintinueve (29) de noviembre de 2012 especificó:
- (i) La Nación cedió sus derechos a título precario, y no se desprendió del control administrativo de la sociedad, que ejerce a través del Comité Transitorio Interinstitucional de Vigilancia. Además, las disposiciones estatutarias son claras en preservar la naturaleza de economía mixta del orden nacional de la sociedad, pese a que la Nación cedió sus derechos sociales. Por estas cláusulas especiales, la sociedad conservaría la naturaleza de economía mixta del orden nacional y su vinculación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
  - (ii) El Contrato de encargo fiduciario de administración y pagos celebrado entre el Instituto de Fomento Industrial IFI en liquidación, y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – FIDUCOLDEX, tiene por finalidad administrar los bienes entregados por el primero, así como explorar, explotar y comercializar las salinas de Manaure conforme al contrato de administración delegada entre el IFI y la Nación el 2 de abril de 1970 y las estipulaciones contractuales contenidas en la



escritura pública 135 del 21 de diciembre de 2004 de la Notaría Única de Uribia, Guajira, con sus correspondientes modificaciones.

- (iii) Según el Otro Sí No. 2 al contrato de encargo fiduciario, SAMA LTDA sustituye como encargante al IFI en liquidación, y los remanentes de las subcuentas denominadas comisiones fiduciarias, déficit operacional y asesoría – contratación operador privado-, se destinarán a los accionistas del IFI en liquidación, independientemente de que se hubiese producido su extinción jurídica.
  - (iv) Se observa que en el acto de constitución de la sociedad se estableció la existencia del Comité Transitorio Interinstitucional de Vigilancia por el término de diez (10) años contados a partir de la suscripción de la escritura pública número 135 del 21 de diciembre de 2004, del que hace parte el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
  - (v) La participación del Ministerio es de tal importancia en el funcionamiento de la sociedad, que se estableció que los cesionarios de los derechos de la Nación se obligan a no votar ninguna reforma estatutaria que recorte o disminuya los derechos que la Nación se reserva por conducto del Ministerio en la administración, como parte integrante del Comité<sup>2</sup> y que cualquier disminución deberá obedecer a la voluntad del Gobierno Nacional.
  - (vi) En consecuencia, en concepto de la Sala, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe seguir en el Comité Transitorio Interinstitucional de Vigilancia.
- 14.- Después de haber pretendido reestructurar la sociedad y de nombrar promotor para ese propósito en noviembre de 2013, la doctora Susana Hidvegi Arango, el pasado veintidós (22) de abril se abstuvo de decretar la liquidación judicial de la sociedad. Advierte que por la naturaleza de ella y por las afectaciones que esta situación traería a la comunidad Wayuu, esa entidad no puede abocar competencia.
- Sostiene, a su turno, que la Superintendencia habría agotado las gestiones y acciones correspondientes para reestructurar la sociedad, que se incumplieron acuerdos alcanzados y por tanto procedería liquidarla.
- 15.- La empresa tiene obligaciones pendientes por valor de veintidós mil trescientos cincuenta millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos un pesos (\$22.350.158.501).

---

<sup>2</sup> Artículo 15 de los Estatutos de la sociedad.

## Proposiciones

A partir de los antecedentes y las consideraciones reseñados, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se permite presentar proposiciones tendientes a salvaguardar los intereses y ejercicio de la sociedad.

Lo anterior, sin soslayar que se trata de una sociedad de economía mixta -en función de la participación de una entidad territorial- y por tanto descentralizada, con sujeción al artículo 38 de la Ley 489 de 1998, condición que por expreso mandato legal -artículo 3 de la Ley 1116 de 2011- proscribire a la Superintendencia de Sociedades a adelantar la etapa de liquidación referida en autos del veintidós (22) y seis (6) de junio del año en curso.

No pretende debatirse sobre argumentos, consideraciones y proceder de la Superintendencia de Sociedades que opta por la liquidación de la sociedad sino plantear exclusivamente proposiciones que permitan el ejercicio de la sociedad y sobre esa base la preservación de intereses de la comunidad wayuu.

### 1.- Proyecto de Ley

Con sujeción a las funciones constitucionalmente otorgadas al Congreso de la República, previa concertación con la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se presenta para discusión el siguiente proyecto de artículo a incluirse en el proyecto de ley de apropiaciones para la vigencia 2022:

ARTÍCULO XXXX. Autorización a favor del Ministerio de Comercio Industria y Turismo para constituir el Patrimonio Autónomo Salinas Marítimas de Manaure - PASALMAR. Autorícese al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para constituir un patrimonio autónomo denominado Salinas Marítimas de Manaure - PASALMAR, con el objeto de administrar, fabricar, explotar, transformar y comercializar la sal que se produce en las salinas marítimas de Manaure, La Guajira, en beneficio de la comunidad Wayuu.

El patrimonio autónomo PASALMAR se registrará por las normas de derecho privado, será administrado por la sociedad fiduciaria que determine el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y sus gastos de funcionamiento y administración se financiarán con los recursos producidos en su operación.

Los recursos que integrarán el patrimonio autónomo son los siguientes:

1. Activos de la sociedad Salinas Marítimas de Manaure Limitada— SAMA LTDA.
2. Recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.
3. Recursos aportados por las sociedades y entidades que integran la rama ejecutiva del poder público en el orden Nacional, entidades territoriales o por particulares a través de convenios o transferencias.



4. Donaciones.
5. Recursos de cooperación nacional o internacional.
6. Rendimientos financieros generados por los recursos entregados, los cuales se reinvertirán de pleno derecho en el vehículo.
7. Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.

Parágrafo 1. Una vez se constituya el patrimonio autónomo PASALMAR, la Superintendencia de Sociedades adelantará la liquidación de la sociedad Salinas Marítimas de Manaure Limitada — SAMA LTDA, como consecuencia de la ocurrencia de la causal de liquidación legal derivada del incumplimiento del acuerdo de reorganización de pasivos, suscrito en el marco de la Ley 550 de 1999. Dicha liquidación se regirá por el procedimiento señalado en la Ley 1116 de 2006.

Como consecuencia de la liquidación, se autoriza al Gobierno Nacional para apropiar y transferir al patrimonio autónomo creado a través del presente artículo, recursos del Presupuesto General de la Nación en cuantía equivalente a veintidós mil trescientos cincuenta millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos un pesos (\$22.350.158.501), para pagar los pasivos de la sociedad Salinas de Manaure Limitada – SAMA LTDA que se hayan causado con corte al 31 de diciembre de 2021, en los términos de la liquidación adelantada por la Superintendencia de Sociedades.

Parágrafo 2. El Gobierno Nacional reglamentará la composición y funciones de la Junta Asesora Técnica del patrimonio autónomo PASALMAR, estableciendo dentro de sus competencias la elaboración y presentación de recomendaciones para implementar acciones que propendan por la sostenibilidad de la empresa.

De igual manera el reglamento contemplará los aspectos mínimos del contrato de fiducia mercantil y el procedimiento para su celebración; la designación, conformación y funciones del Comité Fiduciario, el cual estará integrado por nueve (9) miembros de los cuales cuatro (4) miembros serán representantes de la Comunidad Wayuu y las entidades territoriales; las condiciones en las que pueden aceptarse nuevos aportes, públicos o privados, al fideicomiso; y las causas y el procedimiento para modificar o terminar el contrato.

La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra a entera disposición para discutir, revisar, ajustar o complementar los argumentos y las consideraciones arriba presentados.

Atentamente,

Julián Alberto Trujillo Marín  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
[jtrujillo@mincit.gov.co](mailto:jtrujillo@mincit.gov.co)  
Oficina Asesora Jurídica